



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

PROCESO: ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: CLARA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ
DEMANDADO: CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H.
RADICADO: 05360 31 05 001 2015 00494 01
ACTA N°: 38

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA** procede pronunciarse en virtud del recurso de apelación de la parte demandante, en el proceso promovido por **CLARA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ** en contra del **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H.** frente a la sentencia con la cual el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 38** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

La DEMANDANTE pretende con este proceso se declare la existencia de un contrato de trabajo con el CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE CUAYABAAL P. H., desde el 5 de marzo de 2005 hasta el 21 de enero de 2014 y como consecuencia de ello, se condena al pago de salarios adeudados entre el 5 de marzo de 2005 y el 27 de agosto de 2006, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones por todo el tiempo laborado, además de las indemnizaciones de que tratan los artículos 64 y 65 del CST, y las costas del proceso.

1.2. CONTESTACION²

El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones manifestando, en síntesis, que: **i)** Las pretensiones de la demandante carecen de soportes fácticos y sustento

¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA - ARCHIVO 01, Páginas 3 a 8.

² CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01, Páginas 56 a 62.

jurídico. **ii)** Entre las partes lo que existió fue un contrato de prestación de servicios profesionales, pero nunca se pactó una relación laboral. **iii)** Por tratarse de un contrato de prestación de servicios no hay lugar a declarar despido injusto. **iv)** Por sustracción de materia no hay lugar a declarar la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Propuso como excepciones: PRESCRIPCIÓN, INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL, INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES, PAGO, TEMERIDAD Y MALA FE, INDEBIDA PRETENSIÓN Y PAGO DE LO NO DEBIDO y la de ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA.

1.3. SENTENCIA³

En audiencia del **11 de julio de 2016** la Juez Primera Laboral del Circuito de Itagüí toma las siguientes decisiones: **i)** ABSUELVE al CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H. de las súplicas invocadas en su contra por CLARA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ. **ii)** Declara implícitamente decididos los medios de defensa propuestos por la parte demandada. **iii)** CONDENA en COSTAS a cargo de la parte demandante.

1.4. RECURSOS DE APELACIÓN

El apoderado de la demandante estructura su argumentación solicitando se concedan la totalidad de las pretensiones primera y segunda, y todas las consignadas en la demanda manifestando que: **i)** La demandante inició labores al servicio de la demandada desde el año 2005 a través de un contrato verbal laboral en el cual, si bien los testigos manifiestan que tal servicio era gratuito, lo cierto es que no existe prueba de tales manifestaciones. **ii)** Dentro del proceso se pudo probar la subordinación toda vez que el Consejo y la Asamblea de Copropietarios si bien fijaba un presupuesto que debía ejecutar la demandante, lo cierto es que esta siempre exigía dentro de ese presupuesto el otorgamiento las prestaciones sociales y la seguridad social. **iii)** Dentro de la ejecución de ese contrato, la demandante nunca contó con las prestaciones sociales ni con un lugar o espacio físico digno para el desarrollo de las labores como trabajadora viéndose obligada a utilizar su vivienda para ello. Por lo anterior, se ratifica en las pretensiones primera, segunda y en todas las solicitadas con la demanda.

2. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia⁴, el demandado, **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H.** se abstuvo de intervenir.

³ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01, Páginas 76 - 77

⁴ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 03, Páginas 1 a 4

El apoderado de la **demandante**⁵ reitera el planteamiento del recurso dirigido a que se revoque la sentencia para en su lugar acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda, presentando los argumentos esbozados en el recurso, así: **i)** Señala que quedó demostrado en el plenario que la señora Clara María González fue elegida por la asamblea de propietario del Conjunto Cerrado Praderas de Guayabal P. H. como administradora desde el 5 de marzo de 2005 a través de un contrato laboral verbal a término indefinido, fecha desde la cual cumplió con las obligaciones establecidas en la ley y las indicadas por el Consejo de Administración, sin que se le pagaran los salarios ni le brindaran la dotación para desarrollar sus servicios. **ii)** Aduce que de la prueba documental se evidencian las reuniones de Asamblea de Copropietarios donde se le daban las órdenes a cumplir por parte de la demandante. Y que con la prueba testimonial arimada al proceso se logra demostrar la prestación personal del servicio por parte de la demandante, que no tenía autonomía y que sus funciones de lo acordado por el Consejo de Copropietarios. Y si bien el 27 de agosto de 2006 le hacen un contrato por prestación de servicio donde se le asigna una remuneración de \$500.000, lo cierto es que nunca le liquidaron el contrato laboral, concluyendo que por esto tal contrato nunca se terminó y que tal situación también quedó probada dentro del proceso con los testimonios allegados. Insiste en que los testigos de la parte demandada fueron tachados de sospechosos, entre estos y la demandante existe una gran enemistad, por lo que insiste en que no pueden ser tenidos en cuenta para resolver este asunto. **iii)** Si bien la demandante no tuvo exclusividad para desarrollar la labor de administradora en el Conjunto demandado, lo cierto es que, para cumplir con la misma labor en otras copropiedades, contó con el apoyo de una asistente. Finalmente reitera que la demandante fue retirada del cargo sin que mediara justa causa y sin que se le realizara un debido proceso disciplinario, por lo que se le debe reconocer la indemnización por despido injusto.

Pues bien, **la competencia de la Sala está dada por las materias del recurso de apelación de la activa**, por lo que corresponde determinar si en el proceso se encuentra acreditada la existencia de un vínculo laboral y en caso afirmativo, los extremos temporales y remuneración, para luego analizar la procedencia de condenar a las pretensiones deprecadas en la demanda.

3. SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO: LA DEMANDADA NO DESVIRTUÓ LA PRESUNCIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 24 DEL CST.

⁵ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – ARCHIVO 03, Páginas 1 a 3

Para efectuar el análisis debe partirse de una premisa clara: En la demanda se afirma que CLARA MARIA GONZALEZ VELASQUEZ prestó el servicio para el CONJUNTO CERRADO PRADERAS GUAYABAL P.H. desde el 5 de marzo de 2005 hasta el 21 de enero de 2014 y en la contestación se acepta la prestación del servicio como administradora, pero enfatizando en la suscripción de un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS en virtud del cual se remuneraba mediante honorarios, señalando que jamás existió subordinación y que prestaba servicios bajo la misma modalidad a otras personas jurídicas regidas por Régimen de Propiedad Horizontal.

La Juez de instancia acogió la tesis de la pasiva y precisó en relación con la prestación del servicio, lo siguiente: **i)** Quedó demostrado que la actora desde el mes de marzo de 2005 ofreció de forma gratuita la prestación de servicios para ayudar al funcionamiento y solución de los problemas de la propiedad horizontal en calidad de copropietaria. **ii)** Para la anualidad 2006 se le propuso a modo de contraprestación por los servicios prestados el no cobro de la cuota de administración. **iii)** Ya para el **01 de abril de 2007** celebraron un contrato de prestación de servicios fecha desde la cual siguió en el ejercicio de las funciones propias de una administradora hasta el **21 de enero de 2014**. Concluyó que el cumplimiento de las funciones realizadas por la actora eran las propias de un cargo de administradora en forma autónoma y que la pasiva desvirtuó la imposición de horarios y órdenes.

De acuerdo con lo previsto en los **arts. 22 y 23 del CST**, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y servicios por los cuales se paga al trabajador una remuneración.

Así, para que exista un contrato de trabajo se requiere que concurren tres elementos esenciales: **i)** La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, ateniendo a que se trata de un contrato celebrado en razón a la persona *-intuito personae-*; **ii)** La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este a exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, con la consecuente obligación del trabajador de acatar estas directrices; y **iii)** Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres elementos de que trata el **art. 23**, se entiende que existe contrato de trabajo y **no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen**.

Además, no puede perderse de vista que en el **art. 24 del CST** modificado por el **art. 2º de la Ley 50 de 1990**, se dispone expresamente que *“Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”*, de manera que una vez demostrada la **prestación personal del servicio** se activa la presunción de que esta se ejecutó bajo los parámetros de un contrato de trabajo, lo que obliga a quien se opone a la declaratoria de ello y de sus consecuencias, a derribarla probando que tal relación estuvo exenta de subordinación jurídica, como se ha precisado reiteradamente por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la **SL16528-2016**, **SL 2608-2019**, **SL4444-2019** y **SL2736-2020**. En la identificada con **radicado 39600 del 24 abr. 2012**, sobre este aspecto, se puntualizó:

«...De lo anterior se extrae que, probada la prestación personal del servicio, la subordinación se presume.

Por ende, muy poco le sirve al demandado, para exonerarse de las obligaciones propias del contrato de trabajo, **la aceptación de la prestación del servicio de manera continua con la sola negativa de la existencia del contrato de trabajo, o la sola afirmación de que se trató de un contrato de distinta naturaleza.**

Si el demandado acepta la prestación del servicio, pero excepciona que lo fue mediante un contrato civil, como sucedió en el sub lite, **le allana el camino al demandante para ubicarse en el supuesto de hecho contenido en el artículo 24 del CST y ampararse en la presunción de que se trató de un contrato laboral**. En cuyo evento, el demandado tiene a su cargo desvirtuar la presunción mediante pruebas que demuestren, con certeza, el hecho contrario del elemento de la subordinación, es decir que la prestación personal del servicio se dio de manera independiente” (negrilla intencional)

Y en la **SL 1639 de 2022** expresó:

Ese pilar se ha desarrollado en tanto **no es atendible que la entrega libre y voluntaria, de energía física o intelectual que hace una persona a otra, bajo continuada subordinación, pueda negársele tal carácter, y por ello es que se ha entendido en amparo del propio artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que toda prestación personal de servicio remunerada se presume regida por un contrato de trabajo, disposición que asigna un paliativo probatorio al trabajador, a quien le basta demostrar la ejecución personal para que opere en su favor la existencia del vínculo laboral**, mientras que el empleador deberá desvirtuar el hecho presumido a partir de elementos de convicción que avalen que el servicio se ejecutó bajo una relación jurídica autónoma e independiente (**CSJ SL1664-2021**). (negrilla intencional)

Pues bien, para efectuar el análisis la Sala encuentra el siguiente acervo probatorio:

En primer lugar, según certificación de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Medellín, si bien el **22 de abril de 2004** se registró en la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín la persona jurídica ETAPA 1 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PRADERAS DE GUAYABAL P.H., posteriormente en el **24 de enero** y **30 de junio de 2005**, así como el **27 de marzo de 2006** se adicionaron las ETAPAS II, III y IV del CONJUNTO RESIDENCIAL

PRADERAS DE GUAYABAL, siendo representante legal en calidad de administradora CLARA MARIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ ratificada según Acta 003 del **26 de marzo de 2006**⁶.

Se allegó al plenario **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** suscrito el **1 de abril de 2007** por **CARLOS MARIO GÓMEZ ESPINOZA** actuando como presidente del consejo de administración del **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL**⁷ y **CLARA MARIA GONZÁLEZ VÁSQUEZ** para prestar los servicios de administradora con vigencia de un año prorrogable, en el que se pactó como remuneración UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE pagadero el primer día hábil de cada mes. En el documento se estableció que el horario de trabajo sería el de las necesidades resultantes de la naturaleza del oficio.

Ahora bien, en el proceso se recibió la declaración de la señora **GONZÁLEZ VÁSQUEZ** en la que no efectuó confesión alguna en contra, destacando entre ellas:

“Es cierto si o no que, usted en forma libre e independiente ejercía sus funciones sin que la Asamblea le hubiese establecido horarios o subordinación alguna. RESPONDIÓ: No. (...) ¿Qué personas le indicaban a usted qué debía ejercer esas funciones? RESPONDIÓ: Inicialmente la Asamblea cada año establecía un derrotero para todo el año, luego el Consejo de Administración era el que determinaba qué se hacía y cómo se hacía. ¿Cuál era el contacto que tenía con ellos? RESPONDIÓ: Permanente: ¿Dónde estaba ubicada su oficina? RESPONDIÓ: En mi casa, todo el tiempo mi casa funcionó como oficina de la Administración y nos reuníamos en el Salón Social, pero muchas veces nos reunimos fue en mi casa.

En este contexto se destaca por esta Corporación la importancia de su declaración, debiendo resaltar que a partir de la entrada en vigencia del **artículo 165** del Código General del Proceso se introdujo como medio de prueba **la declaración de parte** independiente a la confesión, lo cual se ve reafirmado en el **inciso final** del **artículo 191** del mismo estatuto procesal, que previó la posibilidad de valorarla de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, lo que no va en contravía del principio según el cual a nadie le está permitido fabricar la propia prueba en su favor, siendo claro que su valoración se está efectuando con el conjunto de las demás declaraciones recaudadas en el plenario y la prueba documental recaudada (**SL 4093-2022**).

Y varios testigos declararon respecto a la forma como se ejecutó la prestación del servicio:

⁶ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01, Página 11

⁷ De acuerdo con lo previsto en la **Ley 675 de 2021, artículo 50, parágrafo 1º**: “Para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador, actuará como representante legal de la persona jurídica el presidente del consejo de administración o, cuando este no exista, el presidente de la asamblea general”.

ISABEL CRISTINA LEMA BOTERO⁸ conoce a Clara porque son vecinas del Conjunto Cerrado Praderas de Guayabal P. H. desde hace 11 años y es propietaria de dos casas de ese conjunto. Indica que Clara se encuentra desempeñando las funciones de Administradora del Conjunto Cerrado Praderas de Guayabal P. H. desde el año 2005. Sabe que dentro del presupuesto fijado por la Asamblea de Copropietarios del Conjunto estaba el rubro del salario de la demandante, pero no así el de seguridad social. Con respecto al horario indica que al residir en la misma unidad la disponibilidad era de día y de noche, la buscaban a cualquier hora para llevarle las cuotas de administración y a esperar el recibo de caja correspondiente. El cargo de administradora siempre lo ejerció desde su propia casa porque no tenían un espacio disponible para ello, pero posteriormente sí adecuaron un lugar donde tienen la documentación y las cosas de la Administración. La Asamblea de Copropietarios ni en Consejos de Administración le exigieron a la demandante que presentara cuentas de cobro para el pago de la seguridad social durante el tiempo que prestó sus servicios. Clara González realizó funciones de administradora hasta que se posesionó la señora Gloria Macías en abril del año 2014. Dice que Clara administró otras propiedades horizontales como la Urbanización Bosques de San Nicolás por tres años; Parque Residencial Alabama – La Estrella, Bosques de Suramérica en Itagüí y en Riviera del Sur que es la única que administra para el momento en que se hizo la declaración. Dice que fue su asistente en esas otras propiedades en las que no requerían la presencia de la demandante siendo la testigo quien atendía los requerimientos y visitaba las unidades, y Clara se reunía en los Consejos que por lo general se hacían una vez al mes en horas de la noche. La labor de asistente para las otras copropiedades la realizó entre el año 2006 hasta julio del 2014, redactaba las cartas, hacía llamados de atención, recibos de caja, visitaba las copropiedades, recibía a los copropietarios, hacía estados de cuenta de las cuotas de administración. Clara en las otras copropiedades sí tenía que demostrar el pago de la seguridad social y mensualmente presentar la cuenta de cobro. Explica que el primer nombramiento de la demandante como administradora lo hizo la Asamblea, de ahí en adelante la ratificaban en la asamblea y el Consejo, era una ratificación tácita

GABRIEL ARCÁNGEL ALZATE PUERTA⁹ conoce a Clara María González porque vive en el Conjunto Praderas de Guayabal P. H. desde el primero de febrero del año 2007, fue miembro del Consejo de administración durante el año 2010. De este testimonio se destacan las siguientes afirmaciones:

¿Durante ese periodo dentro en el ejercicio suyo como miembro del Consejo de administración la señora Clara solicitaba autorización para el ejercicio y sus funciones? R/. Siempre tenía que solicitarlo era el consejo quien determinaba qué

⁸ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 03 – Minuto 25:48

⁹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 03 – Minuto 53:08

era lo que se hacía, qué debería pagar y todo lo que se iba a hacer pasaba por manos del consejo y en esa época yo era presidente éramos los que determinamos que hacer. **Como presidente del Consejo de administración ¿la señora Clara le presentaba la contabilidad o no la presentaba?** R/. Ella nos presentaba los informes en las reuniones de consejo y cómo es siempre legal lo hacía cada año a la asamblea, para esto se tenía una firma de contadores. (...) **¿Supo usted cuando la señora aclara solicitó autorización al consejo de Administración?** R/. Ella siempre debía solicitarlo o ser aprobado por el consejo de administración, ella siempre que ella iba a atender una diligencia por fuera de la Urbanización debería también solicitarlo autorización para saber, esto porque ella permanentemente estaba en la unidad atendiendo las situaciones que se presentaban en el día, inclusive, a veces de noche, entonces ella siempre nos daba los informes, especialmente el consejo. **¿Sabe usted el horario en que se encontraba la demandante en la propiedad horizontal?** R/. Ella estaba disponible siempre, cuando uno la necesitaba en el día o un domingo, ella siempre estaba disponible para las situaciones que se presentaban, aun los domingo y festivos, muchas veces me tocó hacerlo por seguridad de la unidad y siempre estuvo dispuesta. **¿Dígale al despacho si lo conoce o sabe quién le pagaba mensualmente los honorarios a la señora Clara González?** R/. Los pagaba la Urbanización con autorización del Consejo de administración. **¿La señora Clara María González para el tiempo en que se desempeñó como del conjunto cerrado Praderas de Guayabal administraba otras copropiedades?** R/. Ella su permanencia era en la Urbanización Praderas de Guayabal y tenía otras urbanizaciones para la cual tenía una asistente, es que ella en ningún momento me solicitó personalmente que iba a compartir el tiempo, ahora, cuando esto se llevó a la Asamblea yo me opuse a esa situación, porque yo entendía que ella tenía que cumplir primeramente a nuestra organización y entonces tenía una un asistente en las otras organizaciones, ya cuando ella tenía asamblea en las otras propiedades horizontales, simplemente solicitaba el permiso **¿La Asamblea general, bien ordinaria o extraordinaria, le impuso algún horario de permanencia a la señora Clara María González dentro de la Urbanización para ejercer sus funciones?** R/. Como tal dentro del reglamento de propiedad horizontal y la Ley 675, la Asamblea elige, más no es la encargada de poner esos horarios y pormenores a los trabajadores, de eso se encarga el consejo de administración junto con la administración **¿Sírvese indicarle al despacho si usted conoce o conoció algún acta del de consejos de administración que le impusieran algún horario a la señora Clara María González Velázquez?** R/. Yo no leí todas las actas, pero en las actas que teníamos de consejo sí se determinaba el horario, esto se hacía durante el mes o semanal es decir se hacía una agenda o un cronograma de trabajo del cual yo personalmente exigía cumplimiento.

También declaró **DORA ELENA URREGO ÁLVAREZ**¹⁰ testigo citado por la pasiva siendo tachada por existir una enemistad grave con la demandante en atención a que ésta radicó denuncia penal por los presuntos delitos de injuria y calumnia (artículos 220 y 221 del C.P), incorporándose al expediente acta del 19 de agosto de 2015 de la Fiscalía, que contiene la constancia de no acuerdo conciliatorio¹¹. La testigo dijo conocer a Clara María González porque llegó a vivir al Conjunto Cerrado Praderas de Guayabal P. H. en el **año 2005**, en ese momento estaba como administradora la señora Evelyn quien unos meses después le entregó a Clara la administración. Dice que

¹⁰ **CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 03 – Minuto 53:08**

¹¹ **CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01 – páginas 77 a 82**

inicialmente Clara dijo que no iba a cobrar nada, iba a trabajar por la unidad y eso fue durante el 2005 2006; en el año 2006 se hace la primera asamblea y en ella se acuerda que lo único que ésta iba a recibir por la labor era no pagar la cuota de administración durante ese año. Ya en el 2007 - 2008 la testigo empiezo a trabajar en el Consejo y con otra copropietaria estaban pendientes de hacer un contrato por prestación de servicio. Relata que empezó a ver que no había informes ni soportes contables, a las reuniones que la llamaban no asistía. Y en los **años 2009 y 2010** empezó a suceder lo mismo, entonces empezaron a pedirle recibos y cuentas, pero la demandante nunca asistía a las reuniones.

¿Sírvasse indicar en forma concreta se llegó a firmar algún contrato de prestación de servicios por administración con la señora Clara durante la época en que usted fue miembro del Consejo de Administración? R/. No. **¿En el presupuesto anual que presentaba el administrador a la asamblea se incluía el rubro honorarios por administración?** R/. Si se incluía ese rubro y ella misma se lo pagaba. **¿Dígale al despacho hasta qué fecha ejerció funciones como administradora la señora Clara y cómo fue su desvinculación?** R/. Hasta el año 2013 en la última asamblea ella misma renunció porque en las asambleas anteriores siempre ella o se postulaba y continuaba por favor se postulaba y siempre seguía siendo la administradora. **¿Tiene usted algún tipo de animadversión con la señora Clara en razón de una simple denuncia que ella formuló contra usted?** R/. El año pasado con gran extrañeza recibimos un grupo de propietarios en los que yo estaba una demanda en la que la señora Clara entre los puntos creo que eran cuatro puntos que ella decía: 1) que ella nos había demandado porque nosotros habíamos dicho que no había una contabilidad Clara ni unos ingresos y egresos claros que permitieran darle a la copropiedad como esa certeza de que teníamos y qué era lo que se manejaba en ese momento dos que había dicho en esa en esa demanda, 2) que ese grupo de personas habíamos dañado su matrimonio, 3) que a la unidad habían llamado a pedir referencias de personales y que no se sabe quién no se sabía qué teléfono no se sabe dónde habíamos dado mala referencias de ella y la otra razón no la recuerda. Insiste en que no tiene ningún tipo de animadversión con la demandante, que la traba como a una de las 96 vecinas que viven en la Unidad.

La testigo informa que Clara María González ejercía funciones de administradora en otras copropiedades como **Riviera del Sur**, Unidad **praderas**, Unidad **Entre Colinas** y unas unidades por los lados de **Rodeo Alto**.

¿Dígale al despacho Si la señora Clara María González recibía órdenes expresas y puntuales del Consejo de administración? R/. En los dos consejos que yo estuve nunca recibió órdenes y de hecho conocí que muchos de los consejos que se formaban se quedaban en el camino porque decían que trabajara ella sola porque no había con quien trabajar, es que ella no permitía que se tuviera en cuenta recibos, platas, manejos, reuniones ni nada de eso, entonces todas las personas se iban quedando en el camino porque ella no permitía que nadie más manejara la administración.

¿Dígale al despacho si lo sabe o conoció que otros consejos y Administración hubieran suscrito con la señora Clara contrato de prestación de servicios? R/. No ninguno, de hecho, la señora Araceli Vergara y yo fuimos las únicas que le propusimos firmara por favor un contrato por prestación de servicio y en ningún momento ella se prestó.

¿Dígale al despacho quién autorizaba los pagos de los honorarios que percibía la señora Clara María González como administradora? R/. La misma señora Clara.

Por último indica que a la demandante no le exigieron contratos de prestación de servicios por todos los años ni pagos de aportes a la seguridad social porque la mayoría de las personas que se fueron a vivir a la Unidad era la primera vez que vivían en una

propiedad horizontal, y por ello no tenían conocimientos de Consejos de Administración, ni de las funciones que hacían los administradores, que simplemente muchos de los propietarios se unieron para sacar adelante los problemas que le había dejado la constructora a la unidad, y que en ese ir y venir fue la misma demandante quien se ofreció a realizar todas esas labores y todos aceptaron, pero la demandante nunca hablo de contrato de trabajo.

Finalmente, declara **LARRY WILSON GARNICA CAMACHO**¹² quien también conoce a la demandante por ser copropietario de la unidad desde el año 2006 y fue miembro del Consejo de administración durante los años **2013, 2014 y 2015**. Este testigo también fue tachado en virtud de la denuncia penal formulada en su contra por la activa por los presuntos delitos de injuria y calumnia¹³. El testigo informa que para el mes de diciembre del 2006 en que llegó a la copropiedad Clara María Vélez González era la administradora del conjunto. Dice que ella inicialmente empezó como administradora por vocación, ella fue quién le hizo entrega del manual de convivencia al llegar la Unidad. El testigo como miembro del Consejo de administración en el 2013 afirma que en ningún momento se le daban órdenes ni cumplía un horario, que con ella nunca tuvieron una relación, nunca hubo una reunión.

¿Sabe usted dentro del periodo que la señora Clara ejerció el cargo de administradora donde ejercía sus funciones dentro de la unidad en la casa de ella?

R/. No, es que ella no tenía horario. **Cuando usted fue miembro del Consejo de administración, ¿podía darle órdenes, o uno de los miembros le podía dar órdenes a la demandante?** R/. No lo que hicimos fue en armar un cronograma de trabajo para realizar todas las actividades de la copropiedad pero no fue posible (...) me puede expresar por favor **Cómo fue la terminación o desvío o cesación del cargo la escuela Clara como administradora?** inicialmente nos lo hizo conocer al consejo o bueno no el consejo porque no fue en una reunión del Consejo sino directamente y personalmente a mí en mi casa, me lo hizo saber de que ya trabajaba hasta el 31 de diciembre del 2013 y posteriormente lo hizo público en una asamblea de copropietarios de la de la unidad

En criterio de esta corporación se trata de **testimonios exactos**, responden a las preguntas de manera cabal y puntual, deponen sobre aspectos que conocen y ofrecen claridad sobre las razones por las que indican conocer lo que afirman por ser copropietarios del **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAAL P. H.** y haber ejercido en algún momento cargos en el Consejo de Administración. Son **testimonios responsivos** al ofrecer una respuesta adecuada de acuerdo con el conocimiento que razonablemente debían tener según lo afirmado por ellos mismos, dando cuenta que la accionante fue la administradora de la pasiva desde el momento en que cada uno llegó a ella, que a partir de una época le fueron remunerados los servicios con honorarios, que

¹² **CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 03 – Minuto 1:36:49**

¹³ **CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01 – páginas 77 a 82**

realizaba la labor en su apartamento y que también era la administradora en otras copropiedades, aspectos en los que se encuentra **uniformidad y coherencia**. Ahora bien, los testigos **DORA ELENA URREGO ÁLVAREZ** y **LARRY WILSON GARNICA CAMACHO** fueron tachados de manera oportuna antes de comenzar la diligencia el 12 de abril de 2016, acreditándose en el plenario que ocho meses atrás se había realizado audiencia ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de llegar a un acuerdo sin que ello se hubiese logrado:

LA SEÑORA CLARA MARIA GONZALEZ VELASQUEZ, EN CALIDAD DE QUERELLANTE AFIRMA QUE SU INTERES ES QUE LE SEAN INDEMNIZADOS LOS PERJUICIOS OCASIONADOS, SOLICITA LA SUMA DE CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS, JUSTIFICADOS EN DAÑOS MORALES.

LOS QUERELLADOS INTERVINIERON CADA UNO. DE SU INTERVENCIÓN SE CONCLUYE ANIMO CONCILIATORIO, PERO NO INDEMNIZATORIO, NO ESTAN DE ACUERDO EN INDEMNIZAR NINGUNA SUMA DE DINERO.

POR LO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTE UN ACUERDO CONCILIATORIO ENTRE LAS PARTES, SE ENTIENDE AGOTADA ESTA ETAPA PREPROCESAL Y SE REMITE EL CASO A LA OFICINA DE ASIGNACIONES DE LA FISCALIA DE ITAGUI (ANT), PARA EL TRAMITE DEL INICIO DE LA ACCION PENAL, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 522 DE LA LEY 906 DE 2004, SE INICIO LA AUDIENCIA SIENDO LA 1:30 DE LA TARDE, SE TERMINA LA DILIGENCIA SIENDO LAS 4:30 DE LA TARDE.

Lo anterior adquiere relevancia, porque estos declarantes presentan una versión contraria a **ISABEL CRISTINA LEMA BOTERO** y **GABRIEL ARCÁNGEL ALZATE PUERTA** quienes dan cuenta de la disponibilidad horaria permanente de Clara María González, del cumplimiento de órdenes e instrucciones, solicitud de autorizaciones y que, aunque era administradora en otros conjuntos residenciales, para aquellos contaba con la asistente LEMA BOTERO quién realizaba las visitas y atendía directamente a los copropietarios en sus requerimientos, ante la dedicación permanente de la demandante en la labor desarrollada para la pasiva.

Pues bien, ante la diversidad de posturas entre los deponentes en relación con estos aspectos referidos al cumplimiento de órdenes y jornada, en criterio de esta corporación la demandada no logra desvirtuar la presunción de existencia del contrato de trabajo. así aunque allegó al plenario un CONTRATO DE PRETACIÓN DE SERVICIOS no hay que estarse a las denominaciones que una o ambas partes le den al vínculo o atenerse al rótulo que aparece en los documentos que se crean a partir de esa relación, sino en la naturaleza misma de la relación y la forma como se ejecutaron las prestaciones, para hallar lo esencial del contrato. Desde esa perspectiva, cuando se someta a juicio el **principio de la realidad sobre las formas** con el fin de establecer la existencia del contrato de trabajo, le corresponde al juez, en cada caso, sin desconocer los principios tuitivos del derecho laboral, analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de establecer o desechar, según el caso, los elementos configurativos de la subordinación.

Ahora, sobre el segundo elemento constitutivo del contrato de trabajo, a saber, **la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador**, cabe resaltar que, según la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral, este es el elemento diferenciador entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios¹⁴. En este sentido, la subordinación se ha definido:

[...] como un poder de sujeción jurídica y material entre dos personas y que en el ámbito de una relación laboral se concreta en «la aptitud o facultad del empleador de dar órdenes o instrucciones al trabajador y de vigilar su cumplimiento en cualquier momento, durante la ejecución del contrato de trabajo y la obligación permanente del asalariado de obedecerlas y acatarlas cumplidamente» (CSJ SL, 1 jul. 1994, rad. 6258)¹⁵

Resalta la Corte que el trabajo y sus dinámicas de ejecución se han transformado a lo largo de los años, por lo que en ocasiones el elemento de subordinación no coincide con el concepto tradicional y abstracto “en el que el empleado ofrece su trabajo directo a una fábrica”¹⁶. Por esto, en los casos dudosos o ambiguos en los que la subordinación no se presenta de forma clara, la Corte ha recurrido a la **Recomendación 198 de la OIT**¹⁷, que da indicios para analizar la relación fáctica laboral y así determinar si entre las partes existió una relación laboral encubierta. Al respecto, en Sentencia **SL 1439 de 2021** se hizo una recopilación de los indicios que han sido tratados por la jurisprudencia:

La Sala Laboral ha identificado algunos *indicios* relacionados en la Recomendación No. 198 de la OIT que, sin olvidar su carácter relativo o circunstancial, no exhaustivo y dinámico, pueden ser útiles para descifrar una relación de trabajo subordinada. De esta forma, ha considerado como tales la prestación del servicio según el **control y supervisión de otra persona** (CSJ SL4479-2020); la **exclusividad** (CSJ SL460-2021); la **disponibilidad** del trabajador (CSJ SL2585-2019); la concesión de **vacaciones** (CSJ SL6621-2017); la aplicación de **sanciones disciplinarias** (CSJ SL2555-2015); **cierta continuidad del trabajo** (CSJ SL981-2019); el cumplimiento de una **jornada u horario de trabajo** (CSJ SL981-2019); **realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el del beneficiario** del servicio (CSJ SL4344-2020); el suministro de **herramientas y materiales** (CSJ SL981-2019); el hecho de que exista **un solo beneficiario** de los servicios (CSJ SL4479-2020); el desempeño de **un cargo en la estructura empresarial** (SL, 24 ag. 2010, rad. 34393); la **terminación libre del contrato** (CSJ SL6621-2017) y la **integración del trabajador en la organización** de la empresa (CSJ SL4479-2020 y CSJ SL5042-2020).

Resalto de la Sala

Y más adelante en la misma sentencia estimó:

El trabajador que no tiene un negocio propio, una organización empresarial suya con su propia estructura, medios de producción, especialización y recursos, sino que se ensambla en la de otro, **carece de autonomía**. No se trata de una persona que desarrolla libremente y entrega un trabajo *para* un negocio, sino que **su fuerza de trabajo hace parte del engranaje de un negocio conformado por otro**.

¹⁴ SL 1439 de 2021, que cita SL 2885 de 2019.

¹⁵ **SL 3345 de 2021**.

¹⁶ SL 3345 de 2021.

¹⁷ Como en sentencias CSJ SL2885-2019, CSJ SL4479-2020, CSJ SL5042-2020 y CSJ SL1439-2021, citadas en SL 3345 de 2021.

Sobre el particular, la doctrina autorizada ha señalado que el criterio en cita tiene la peculiaridad de englobar una tríada de conceptos: integración, organización y empresa. De modo tal que este indicio se traduce *«en la inserción o disponibilidad del prestador de servicios dentro del ámbito de dirección y organización del beneficiario, esto es, en la esfera de la empresa a su cargo»*, premisa de la que se deriva suficientemente *«el carácter dependiente o subordinado de la prestación de servicios»*¹⁸.

Resalto de la Sala

Desarrollando esta idea, para la Alta Corporación es claro que un factor indicativo de la subordinación es **que la persona preste un servicio fundamental dentro de la empresa**, integrándose como trabajador en la organización. Al respecto:

Ese factor indicativo del contrato de trabajo, en el plano de la realidad, ha sido aplicado por esta corporación en anteriores oportunidades (CSJ SL2885-2019), además de que ha sido consagrado en la Recomendación 198 de la OIT, que sirve para informar la orientación de la Corte y que señala como parámetro determinante de una relación de trabajo el hecho de que se cumplan labores que implican *«[...] la integración del trabajador en la organización de la empresa [...]»*, tal y como ya lo adocrinó la Sala en la sentencia CSJ SL 4479-2020.¹⁹

Siendo, así las cosas, la Sala acoge los planteamientos de la recurrente debiéndose destacar la importancia de la labor realizada por la actora en su labor de administración de la propiedad horizontal, instalando la oficina en la sala de su residencia porque para la época aún no se había destinado el espacio adecuado en la copropiedad; para efectos de atender los múltiples requerimientos de los habitantes de la copropiedad, ejecutar el presupuesto, ejercer la representación, el recaudo de cuotas y la conservación del Conjunto, lo que da cuenta de la integración de la trabajadora en la copropiedad y lo fundamental de sus actividades para la demandada²⁰.

Ahora, si bien por mandato legal la reunión de la Asamblea era anual y se comprueba que las reuniones del Consejo de Administración eran mensuales, escenario en el que se definían las pautas para el desempeño de sus funciones, el hecho de que sólo se realizara con tal periodicidad en manera alguna sirve de fundamento a la demandada para desvirtuar la subordinación, que tal como ha quedado visto se presume a la luz de lo previsto en el artículo 24 del CST. Siendo claro que ello hace referencia a la **independencia y autonomía técnica de las profesiones liberales**. Sobre el particular, en la sentencia **SL1021 de 2018** se precisó el concepto de profesiones liberales de cara a analizar el postulado de la primacía de la realidad sobre las formas:

En efecto, si se les denominó profesiones liberales es justamente por la libertad e independencia de que gozan quienes las ejercen y en las que media la autonomía técnica, una organización profesional y una marcada autodeterminación en la

¹⁸ VILLASMIL PRIETO, Humberto y CARBALLO MENA, Cesar Augusto. Recomendación 198 OIT sobre la relación de trabajo. 2da ed. Bogotá: Universidad Libre, 2021, p. 129

¹⁹ SL 5042 de 2020.

²⁰ Para ello valga remitirse a la **SL 5042 de 2020** y **SL 4479 de 2020** citadas en SL 3345 de 2021, en la que se explica ampliamente el concepto de **integración del trabajador en la empresa**.

forma en la que la tarea se lleva a cabo, que está estrechamente ligada con la propia responsabilidad personal de los sujetos por los actos profesionales y a las que se añade que todas ellas se someten a un código moral profesional que va a guiar su ejercicio, sin que ello implique que se presente la subordinación.

Así puede articularse la idea de profesión liberal como aquella que tiene un contenido estrictamente intelectual, para la que se precisa una titulación, reconocida por el Estado, y amparada en el artículo 26 constitucional, en la que rige la *lex artis*, entendida como un contenido ético y técnico científico que dirige la labor, la cual tiene especial trascendencia social y que está marcada por la autonomía.

Así, si bien las profesiones liberales plantean escenarios más complejos para los operadores judiciales, en tanto, se deben tener en cuenta diversas variables para diferenciar el trabajo autónomo del subordinado; lo cierto del caso es que no por tratarse de una profesión de este tipo debe inaplicarse la presunción del artículo 24 del CST, sino que es necesario un análisis más riguroso para aplicarla²¹. En estos casos, la subordinación debe analizarse a partir del criterio de **integración** a la organización²², lo que permite concluir que en este caso sí hay subordinación.

También existe prueba de la **continuidad del trabajo**²³ evidenciándose al menos cinco indicios de los tratados por la jurisprudencia como **manifestaciones de subordinación**²⁴, de manera que en este caso, la demandada no solo incumplió con la carga de desvirtuar la presunción de la existencia del contrato de trabajo consagrada en el artículo 24 del CST, sino que además, se probaron los elementos de la relación laboral consagrados en el artículo 23, con una clara prestación personal del servicio remunerada y subordinada a partir de los indicios que se han analizado. En los términos expuestos se REVOCARÁ la decisión de absolver a la demandada para en su lugar **declarar la existencia de un contrato de trabajo**.

4. LOS EXTREMOS DE LA RELACION LABORAL

En la demanda se afirmó que el vínculo inició desde el 5 de marzo de 2005 y la única prueba que existe de ello es la declaración de **DORA ELENA URREGO ÁLVAREZ**²⁵, testigo

²¹ Considera la Corte que, no puede desconocerse que la Constitución económica habilita el ejercicio profesional autónomo, derivado del principio *pro liberate*, que ha sido incluso incorporado en la Ley 100 de 1993, permitiendo a los independientes procurar su derecho fundamental a la salud y otros derechos. SL 1021 de 2018.

²² SL 1439 de 2021: *Por consiguiente, la subordinación en las profesiones liberales recibe una respuesta adecuada a partir del criterio de la integración en un servicio organizado, que implica la dirección, no tanto del contenido de las prestaciones, sino de las condiciones de su ejecución [...]. Negrita propia.*

²³ SL 3345 de 2021, que hace referencia a la continuidad del trabajo en SL 981 de 2019.

²⁴ En concreto: (i) la prestación del servicio se dio en la residencia de la demandante que quedaba en el Conjunto demandado, (ii) el servicio prestado se daba de manera personal; (iii) la actora desempeñaba un papel fundamental en propiedad horizontal como administradora; (iv) tenía disponibilidad horaria permanente; (v) y finalmente se presentó continuidad en el trabajo demostrándose que debía solicitar permisos para ausentarse.

²⁵ **CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 03 – Minuto 53:08**

citada por la pasiva quien dijo haber llegado en el **año 2005** a la Copropiedad, momento en el que había otra administradora quien unos meses después le entregó a Clara el cargo. Pero esta declarante y **LARRY WILSON GARNICA CAMACHO**²⁶ informan que inicialmente la labor se inició por vocación y de manera gratuita, acreditándose en el plenario el pacto de la remuneración mensual sólo a partir del **1 de abril de 2007** con la suscripción del contrato de prestación de servicios suscrito con el señor **CARLOS MARIO GÓMEZ ESPINOZA** quien actuó como presidente del consejo de administración del **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL**²⁷.

Así, si bien en principio todo trabajo debe ser remunerado, lo cierto es que se admite la posibilidad de trabajos gratuitos, es decir, sin derecho a percibir remuneración alguna, pues la vida en sociedad permite que se puedan presentar servicios gratuitos, o lo que es lo mismo, no gobernados por el derecho del trabajo. La Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido unánime al señalar, que en estos eventos son los hechos de cada juicio los que determinan, cuando se discute la existencia de una relación laboral, los que determinarán si existió un vínculo laboral o una actividad personal regida por un ánimo voluntario, despojado del interés de una retribución²⁸. Así, del análisis y la valoración integral de la prueba obrante en el proceso, si bien se demuestra la prestación del servicio desde el año 2005 sin existir certeza sobre el mes del inicio, lo cierto es que en los orígenes de la relación - años 2005, 2006 y hasta marzo de 2007-, la Sala llega al convencimiento de que las actividades desplegadas por la activa no tenían el ánimo de percibir una remuneración, constituyendo una colaboración voluntaria en beneficio de todos los habitantes Conjunto Cerrado Praderas de Guayabal P. H. incluida ella misma, en razón de los beneficios recibidos al poder suplir las necesidades de la administración de la propiedad horizontal.

Y en relación con el extremo final, si bien el testigo **LARRY WILSON GARNICA CAMACHO** afirmó que la activa renunció ante él personalmente como Presidente del Consejo el 31 de diciembre de 2013, en el plenario obran las actas de administración del año 2014 con las que se advierte que la renuncia solo fue aceptada con posterioridad²⁹, certificándose por el Secretario Jurídico de la Alcaldía de Itagüí que fungió como representante legal hasta el **21 de enero de 2014**³⁰.

²⁶ **CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 03 – Minuto 1:36:49**

²⁷ De acuerdo con lo previsto en la **Ley 675 de 2021, artículo 50, parágrafo 1º**: “Para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador, actuará como representante legal de la persona jurídica el presidente del consejo de administración o, cuando este no exista, el presidente de la asamblea general”.

²⁸ Radicado 9709 de 1997, Radicado 24761 del 21 de abril de 2005, Radicación No. 34223 del 13 de abril de 2010, Rad. No. 36238 del 31 de 2011.

²⁹ PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 – páginas 13 a 32

³⁰ PRIMERA INSTANCIA – archivo 01 – página 10

Así, las pruebas del plenario llevan a la Sala al convencimiento sobre la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre el **01 de abril de 2007** y el **21 de enero de 2014**.

5. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

En el hecho SEGUNDO de la demanda se describió el valor de la remuneración percibida que para los últimos años fue por un valor equivalente a un salario mínimo legal, suma con la que se efectuará el cálculo de las condenas sin incluir el auxilio de transporte al no haberse acreditado su causación por vivir en el lugar de prestación del servicio.

Se declarará probada la excepción de prescripción, como quiera que la demanda se instauró el **21 de octubre de 2015**, de donde se sigue que los derechos causados y exigibles durante el contrato causados con anterioridad al **21 de octubre de 2012** quedaron afectados por el paso del tiempo en los términos del art. 151 del Código Procesal del Trabajo. Efectuada la liquidación por cada año, se obtiene lo siguiente:

AÑO 2012 – del 21 de octubre al 31 de diciembre

Cesantías	110.192
Intereses sobre cesantías	2.571
Prima primer semestre	0
Prima segundo semestre	110.192
TOTAL	222.954

AÑO 2013 – del 1 de enero al 31 de diciembre

Cesantías	589.500
Intereses sobre cesantías	70.740
Prima primer semestre	294.750
Prima segundo semestre	294.750
TOTAL	1.249.740

AÑO 2014- del 1 al 21 de enero

Cesantías	35.933
Intereses sobre cesantías	252
Prima primer semestre	35.933
Prima segundo semestre	0
TOTAL	72.118

Frente a las vacaciones baste remitir a la jurisprudencia reiterada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la **SL 46704 del 2016**:

«... no se encuentran afectados por el fenómeno jurídico de la prescripción salvo las vacaciones cuya reclamación implica la pérdida del derecho del trabajador a disfrutar o compensar las correspondientes a los años que excedan de cuatro, pues las mismas son exigibles hasta cuando venza el año que tiene el empleador para concederlas.»

En el caso concreto, la demandante inició a laborar el **7 de abril de 2007**, por lo que causó el derecho a las vacaciones el **7 de abril de 2008**, pudiendo exigirla a partir del 7 de abril de 2009, fecha a partir de la que empieza a contarse el término de 3 años de prescripción. Así, tenía hasta el 7 de abril de 2012 para exigir las, por lo que con la demanda interrumpió las causadas en los siguientes lapsos: Del 7 de abril de 2011 al 7 de abril de 2012, del 7 de abril de 2012 y 7 de abril de 2013 y del 7 de abril de 2013 al 21 de enero de 2014. Corresponde este período a 1013 días³¹ en total , generando el derecho a **42.21** días de vacaciones.

Y de conformidad con el **numeral 3** del **artículo 189** del CST, para la compensación en dinero de las vacaciones, se debe tomar como base el último salario devengado que fue de \$616.000, es decir, \$20.533 diarios que al multiplicarse por 42.21 días se obtiene la suma de **\$866.698**

	2012	2013	2014
CESANTÍAS	\$110.192	\$589.500	\$35.933
INTERESES	\$2.571	\$70.740	\$252
PRIMA DE JUNIO	0	\$294.750	\$35.933
PRIMA DE DICIEMBRE	\$110.192	\$294.750	0
VACACIONES			\$866.698
TOTAL	\$222.955	\$1.249.740	\$938.816

5.3. COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Debe señalarse que son dos las obligaciones del empleador frente al sistema de seguridad social integral: **i)** Reportar la novedad de vinculación laboral del trabajador, desde el inicio de la relación laboral; y **ii)** Efectuar el pago de las cotizaciones cada mes. Si el empleador reporta a su trabajador, y efectúa el pago de las cotizaciones tardíamente, deberá pagar intereses moratorios; y si omite realizar algunos, podrá efectuarlos válidamente de forma retroactiva, asumiendo claro está, el pago de los intereses.

Pero otra cosa distinta sucede, cuando el empleador omite reportar la novedad de afiliación, porque en ese caso lo que se genera es el pago de un **cálculo actuarial**, que se presenta tanto en relación con los contratos de trabajo que se encontraban vigentes al momento en que inició el nuevo sistema general de pensiones (**1º de abril de 1994**),

³¹ Una regla de tres sencilla, Si por 360 días tiene derecho a 15 días de vacaciones, por 1013 días tiene derecho a 42.21 días.

como para los que comenzaron a partir de esa fecha, conforme lo previsto en el art. **33 de la Ley 100, parágrafo 1, literal c).**

Concretamente, en casos como el presente, en que previamente debió solicitarse vía judicial la declaratoria de un contrato laboral, y tampoco hubo inscripción al Sistema General de Pensiones, se ha pronunciado la Sala de Casación en múltiples providencias como la **SL16715 - 2014 - SL14388-2015, SL2731 de 2015 – SL 6552 de 2016 (sentencia de casación) y SL 4432 de 2018 (la sentencia de instancia).**

Pues bien, se declaró que la relación laboral entre las partes se presentó entre el **01 de abril de 2007 y el 21 de enero de 2014**. Siendo así las cosas, al no haberse demostrado en este proceso que la propiedad horizontal demandada haya reportado la existencia del vínculo laboral con la demandante, lo procedente es **CONDENAR** al pago del cálculo actuarial al fondo de pensiones en el que eventualmente se encuentre afiliada, en los términos del **art. 3° del Decreto 1887 de 1994**, por el lapso de tiempo comprendido entre el **01 de abril del año 2007 hasta el 21 de enero de 2014, con base en un salario mínimo mensual legal para cada época.**

Se le ordenará a la DEMANDADA que presente dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia y ante el fondo de pensiones en el que eventualmente se encuentre afiliada la demandante: **i) La solicitud de la liquidación del cálculo actuarial correspondiente por el período comprendido entre el 01 de abril de 2007 y el 21 de enero de 2014 en razón a un salario mínimo mensual legal para cada época; ii) La Administradora de Pensiones liquidará el cálculo actuarial conforme las disposiciones consagradas en el Decreto 1887 de 1994, y el CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H., efectuará el pago correspondiente, a satisfacción de la entidad.**

5.4. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA

En relación con el **despido**, debe la Sala señalar, que uno de los principios rectores del derecho del trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, es el que trata de la estabilidad en el empleo. En consecuencia, el empleador que no respete la estabilidad laboral de sus trabajadores y los despidan sin justa causa, está en la obligación de indemnizar los perjuicios causados con su conducta. Pero reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha enseñado que corresponde al trabajador probar el hecho del despido y al empleador la justa causa para exonerarse de indemnizar los perjuicios – **SL1639 de 2022.**

Se tiene entonces que el trabajador que alega que fue despedido sin justa causa y por tal motivo reclama la indemnización que contempla la ley, debe probar que fue el empleador quien decidió terminar unilateralmente el vínculo laboral. Pero en este caso,

la demandante no trajo prueba alguna para demostrar que el CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H. la hubiese despedido. El testigo Gabriel Arcángel indicó en su declaración que la demandante había renunciado desde el mes de diciembre de 2015, forma de terminación del vínculo al que se hace referencia en el acta 01 de 16 de enero de 2014 que se aporta con la demanda³²

16 enero de 2014 Acta # 01

Siendo las 7 PM nos reunimos en la casa del señor Lory Garmica. las siguientes personas, Geórgio Arcadio, Helga Ochoa, Francisco Elinon, Lory Garmica y un asesor jurídico Mauricio Nogu, el motivo de la Reunion es brindarnos una asesoria jurídica sobre los contratos laborales del trabajador Oscar y hablar sobre la renuncia y Paso a Seguir de la administradora anterior Clara González.

Se nos informo que como la Sra Clara González había renunciado en asamblea en pleno no había ocurrido con la de aceptación, de renuncia, Se había que empesar con los temas de cambio de representante legal, la fecha de la asamblea extraordinaria en la que renuncio Clara fue el 5 diciembre de 2013.

Mauricio nos informo el nuevo posicionamiento del nuevo administrador que lo primero a seguir es el cambio de representación legal, nos indicó los pasos para el cambio.

Así, ante el incumplimiento de la activa en la carga probatoria se absolverá de esta pretensión.

5.5. SANCIÓN MORATORIA POR NO PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES

Conforme el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, el empleador que a la terminación del contrato de trabajo no pague al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudadas, a título de sanción le pagará una indemnización equivalente a un día del último salario diario devengado por cada día de retardo, hasta por 24 meses; y a partir del mes siguiente, deberá reconocer intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera, hasta cuando se verifique el pago, siempre que su actuar no hubiere estado revestido de razones atendibles que lo eximan de tal obligación.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia de la CSJ ha adoctrinado que el reconocimiento de la indemnización moratoria no es automático y que para efectos de

³² CARPETA PRIMERA INSTANCIA – ARCHIVO 01, Página 13.

determinar si es o no procedente, corresponde al juez abordar, en cada caso, los aspectos relacionados con la conducta que asume quien se sustrae del pago de las obligaciones laborales (**SL6621-2017, SL1166-2018, SL1430-2018 y SL2478-2018**)³³.

En el presente asunto, toda la prueba indica que la demandada estuvo bajo el firme convencimiento de que el vínculo contractual entre las partes se regía por un CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, siendo claro que la demandante a lo largo de estos años no efectuó reclamación alguna, no planteó su inconformidad ante la Asamblea o el Consejo sobre la forma de contratación ni reclamó sus prestaciones sociales, estando además a su cargo adelantar tales gestiones en razón de las atribuciones legales, advirtiéndose de este modo buena fe para exonerar de esta pretensión.

Pero, se **CONDENARÁ** a la **INDEXACIÓN** de las sumas objeto de condena que no fueron pagadas en la oportunidad legal porque se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que esta condena no implica el incremento del valor del crédito ya que su función consiste únicamente en *evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia*, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo tal como lo dispone el **artículo 16 de la Ley 446 de 1998** según el cual «dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales». Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda (**SL 359 -2021**).

³³ La sentencia CSJ SL, 21 sep. 2006, rad. 27255, dijo:

“De tiempo atrás la jurisprudencia señala que la aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, no es automática ni inexorable, cada vez que se demuestre que, a la terminación del contrato de trabajo, el empleador ha quedado a deber a su trabajador algún saldo por salarios o prestaciones sociales, sino que es deber del juez analizar, en cada caso, si esa omisión se encuentra justificada en razones atendibles, que permitan inferir que el empresario actuó bajo el entendimiento, razonable, de no deber nada a su trabajador, es decir, que su actuar estuvo revestido de buena fe y, por tanto, no ser censurable ni sancionable”.

6. COSTAS

Como se REVOCARÁ la sentencia en su integridad en virtud del recurso de apelación, se CONDENARÁ en COSTAS en ambas instancias al CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H. **El valor de las agencias en segundo asciende a 1 s.m.l.m.v**

7. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: REVOCAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, para en su lugar declarar que entre el **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H.** y **CLARA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ** existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el **01 de abril de 2007** y el **21 de enero de 2014** que terminó por renuncia de la trabajadora

SEGUNDO: CONDENAR al **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H.**, a pagar a la señora **CLARA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ**, los siguientes conceptos:

	2012	2013	2014
CESANTÍAS	\$110.192	\$589.500	\$35.933
INTERESES	\$2.571	\$70.740	\$252
PRIMA DE JUNIO	0	\$294.750	\$35.933
PRIMA DE DICIEMBRE	\$110.192	\$294.750	0
VACACIONES			\$866.698
TOTAL	\$222.955	\$1.249.740	\$938.816

El pago se hará de manera indexada de acuerdo con la siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXACIÓN}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al **IPC** para la **fecha en que haya de efectuarse el pago**

ÍNDICE INICIAL correspondiente al **IPC** para vigente **a la fecha en que debió efectuarse el pago de cada concepto**

VALOR A INDEXAR que se refiere al **monto de cada concepto**

TERCERO: CONDENAR al **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H.** al pago del cálculo actuarial al fondo de pensiones en el que eventualmente se encuentre afiliada la señora **CLARA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ** en los términos del **artículo 3° del Decreto 1887 de 1994** por el lapso de tiempo comprendido entre el **01 de abril de 2007** hasta el **21 de enero de 2014**, con base en el **salario mínimo mensual vigente para cada época**.

Se **ORDENA** al **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H.**, que dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia presente en el fondo de pensiones en el que eventualmente se encuentre afiliada: **i)** La solicitud de la liquidación del cálculo actuarial correspondiente al período comprendido entre el **01 de abril de 2007 y el 21 de enero de 2014, con base en el salario mínimo mensual legal vigente para cada año;** **ii)** La Administradora de Pensiones liquidará el cálculo actuarial conforme las disposiciones consagradas en el **Decreto 1887 de 1994**, y el **CONJUNTO RESIDENCIAL PRADERAS DE GUAYABAL P. H.**, efectuará el pago correspondiente, a satisfacción de la entidad.

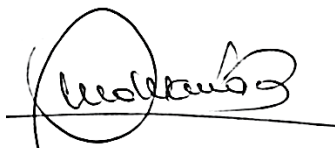
CUARTO: Se DECLARA probada de manera parcial la excepción de prescripción.

QUINTO: Se ABSUELVE al CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL P. H., de las demás pretensiones incoadas en su contra por la señora CLARA MARÍA GONZÁLEZ VELÁSQUEZ.

SEXTO: SE CONDENA EN COSTAS las dos instancias al **CONJUNTO CERRADO PRADERAS DE GUAYABAL S. A. El valor de las agencias en segundo asciende a 1 s.m.l.m.v**

Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quienes en ella intervinieron. Vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Las Magistradas,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE

MARÍA



.RÍOS

RADICADO: 053603105 001 2015 00494 01



RADICADO: 05360 31 05 001 2015 00494 01

SENTENCIA del //26/05/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, para ello debe tener una cuenta de Microsoft. Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EI7T1QXdF5tlqrRzvmM0Y4AB2U94HVJ26RnMKxhK3NDrOw?e=0VYkK6